

SEPTIEMBRE 8 DE 1938

32ª REUNION — Continuación de la 15ª SESION ORDINARIA

Presidencia del doctor RAMON S. CASTILLO,

Vicepresidente de la Nación,

y del doctor ALBERTO F. FIGUEROA,

Vicepresidente provisorio del Senado

Senadores presentes: Mario Arenas, Herminio Arrieta, Ricardo Caballero, Juan B. Castro, Raúl Ceballos Reyes, Juan Cepeda, Alberto Francisco Figueroa, Manuel García Fernández, Héctor González Iramain, Laureano Landaburu, Eduardo Laurencena, Lucio López Peña, Juan José Lubary, José Heriberto Martínez, Alfredo L. Palacios, Guillermo Rothe, Fernando Saguier, Matías G. Sánchez Sorondo, Antonio Santamarina, Carlos Serrey, Juan R. Vidal.

Senador ausente, con licencia: Robustiano Patrón Costas.

Senadores ausentes: Alberto Arancibia Rodríguez, Aldo Cantoni, Atanasio Eguiguren, Francisco R. Galíndez, Jorge J. Pinto, Gilberto Suárez Lago, Benjamín Villafañe.

SUMARIO

I.—Asuntos entrados:

- I.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el que se modifica la ley número 4.349, de jubilaciones y pensiones civiles, y el artículo 17 de la ley número 11.923, en lo que se refiere a la magistratura y al cuerpo diplomático.
- II.—Mensajes del Poder Ejecutivo, comunicando la promulgación de varias leyes.
- III.—Comunicaciones de la Cámara de Diputados.

IV.—Despachos de comisión.

- 2.—Proyecto de ley de la Comisión de Hacienda por el que se prorroga la vigencia de las leyes números 11.720 y 11.741, de moratoria hipotecaria.
- 3.—Mociones del senador Martínez: para sesionar los días miércoles; y fijando la sesión del próximo miércoles, o la subsiguiente, para tratar como primer asunto los despachos de la Comisión de Hacienda en los proyectos de ley sobre modificación del régimen hipotecario del Código Civil (extinción de saldos personales) y sobre extinción de saldos personales en las ejecuciones hipotecarias del Banco Hipotecario Nacional; y el proyecto de ley elaborado por la misma, sobre prórroga de la moratoria hipotecaria. Se aprueban.

4.—Asuntos entrados:

V.—Peticiones.

5.—Proyecto de ley de los senadores Sagüier y Serrey por el que se crea un Liceo de Señoritas en San Isidro (Buenos Aires).

6.—Elección de presidente de la Nación para el caso de acefalía.

7.—Consideración de los despachos de la Comisión de Legislación en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que formulan observaciones al proyecto de ley número 12.383, de despido por causa de matrimonio. Queda pendiente, suspendiéndose la sesión.

—En Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre de 1938, siendo la hora 16 y 10 minutos, dice: el

Sr. Presidente. — Continúa la sesión.

Se va a dar cuenta de los asuntos entrados.

1

ASUNTOS ENTRADOS

I

—Se lee:

Buenos Aires, septiembre 8 de 1938.

Al Honorable Congreso de la Nación.

El Poder Ejecutivo se permite someter a consideración de vuestra honorabilidad el adjunto proyecto de ley, modificatorio de la ley número 4.349 de jubilaciones y pensiones civiles y del artículo 17 de la ley número 11.923, en lo que se refiere a la magistratura y al cuerpo diplomático.

El Poder Ejecutivo propicia ante vuestra honorabilidad la sanción de este proyecto, en mérito a las consideraciones que expone a continuación.

Los miembros del Poder Judicial, por la naturaleza de su función tutelar de los más grandes intereses sociales; por el deber de consagrarse íntegramente a una tarea muchas veces agobiadora, que exige del hombre la máxima atención en asuntos de alta responsabilidad moral; por la obligación de mantener una severa integridad en su vida pública y privada, en una forma digna y compatible con el prestigio y el ascendiente de su cargo; y por la austera conducta personal que deben observar en todo el curso de su vida, tienen derecho a que el Estado vele, también, por el prestigio de su cargo y de su persona, asegurándoles la independencia y el decoro inherentes al mismo en situación de retiro, como una aprobación y un estímulo por los servicios prestados con estas exigencias.

A ser posible, el magistrado en retiro debe vivir con toda la dignidad que le ha reflejado su actuación en servicio, y no debe verse en la situación de procurarse medios de vida, menos elevados o menos conceptuados por la sociedad en que actuó con tan alta jerarquía.

En este sentido, el Poder Ejecutivo ya ha anticipado a vuestra honorabilidad el propósito que consigna en este proyecto de ley al dar lectura del mensaje de apertura del Congreso, manifestando que «se ha de propender al mayor prestigio de la magistratura y para ello ha de asegurarse su independencia y el decoro inherente al cargo, aun en situación de retiro. Es en interés de la sociedad y del Estado que debe prestarse el cargo judicial, pues así se dignifica el espíritu de quienes lo desempeñan y al propio tiempo se inculca en la opinión el respeto por la justicia».

En el mensaje con que se remitió el proyecto de ley, sobre la Cámara de Casación se hacen consideraciones que el Poder Ejecutivo se permite reiterar en esta oportunidad, en lo que se refiere a la jubilación de los jueces, por estimarlas oportunas y atinentes al caso.

El reducido porcentaje de la jubilación que les acuerda el artículo 17 de la ley número 11.923, obliga a meritorios funcionarios a no acogerse al beneficio del retiro, porque ello significa disminuir extraordinariamente sus recursos, en el período de su vida en que por razones de familia les son más necesarios.

El personal del cuerpo diplomático se encuentra en iguales condiciones. Por su jerarquía de representantes de la Nación en el extranjero y por las exigencias que comporta el cargo, deben contraer vinculaciones que le obligan a mantener una situación relativamente elevada, dentro del rango y del decoro inherentes a la función que desempeñan. Los frecuentes traslados a países con diferentes condiciones de vida, en casi todos con más gastos que si vivieran en el propio país, los privan de realizar cualquier previsión para los años de descanso y cuando se acogen al retiro encuentran disminuidos sensiblemente sus medios de vida, sin serles oportuno ni posible emprender otras actividades lucrativas.

El Poder Ejecutivo espera que vuestra honorabilidad, que conoce estas situaciones y comprende la necesidad y el deber de estimular a los magistrados y al cuerpo diplomático, juzgará atinadas las razones que se invocan.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

ROBERTO M. ORTIZ.

Pedro Groppo.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Modifícase el artículo 17 de la ley número 11.923, en el sentido de que para determinar el monto de la jubilación del personal del cuerpo diplomático y el Poder Judicial, se aplicará la disposición del artículo 17 de la ley número 4.349, antes de su modificación por la ley número 11.923. El máximo del beneficio no podrá exceder del 80 % del sueldo devengado al momento de operarse su retiro.

Art. 2º — Se considerarán comprendidos dentro de la magistratura, los ministros de la Corte Suprema, camaristas, fiscales de cámara y jueces; y dentro del cuerpo diplomático, los embajadores y ministros.

Art. 3º — El gasto que demande el cumplimiento de la presente ley se imputará a rentas generales hasta tanto sea incluido en la ley de presupuesto.

Fernando Saguier. — Carlos Serrey.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

La iniciativa privada, adelantándose a la acción oficial, ha procurado llenar un vacío, sensible ya, en el problema de cultura que preocupa al gobierno, creando un liceo de señoritas que funciona con la autorización del Ministerio de Instrucción Pública, en el local del colegio nacional de dicha localidad, en el turno de la tarde.

Una comisión de caracterizados vecinos de la poblada zona del Norte de la Capital Federal y que comprende Tigre, San Fernando, San Isidro, Martínez y Olivos, con la colaboración de un abnegado grupo de profesores, que desempeñan hasta hoy gratuitamente sus cátedras, ha realizado ese propósito, inaugurando a fines de mayo último el curso de primer año, con gran población escolar, que funciona regularmente, con sujeción a los programas oficiales.

Razones muy atendibles impusieron, hace ya tiempo, la separación de las niñas, de los colegios nacionales, cesando la promiscuidad en los establecimientos de educación secundaria; y no sólo motivos de orden moral obligaron tan acertada medida, sino también la necesidad de atender mejor la orientación educacional más conveniente a la mujer que trajo, como una de tantas consecuencias, la de substituir algunas asignaturas del plan originario, por otras más adecuadas a su sexo, tales como la ciencia doméstica, música, labores, etcétera.

Esas y otras razones decidieron la creación de los liceos de señoritas que funcionan con excelentes resultados dentro y fuera de la Capital Federal, y son las mismas que hacen hoy necesaria la oficialización del instituto de la misma índole, que privadamente funciona en San Isidro.

Es evidente el crecimiento de la población escolar en los pueblos del Norte, que han dejado ya de ser estaciones simplemente veraniegas para constituirse en centros importantes de población permanente; y es fácil explicarse las dificultades de todo orden que encuentran las jóvenes educandas para trasladarse a la Capital Federal con el propósito de cursar sus estudios.

Es también sabido que aun cuando pudieran vencerse esas dificultades, los liceos existentes en la Capital Federal tienen plétora de postulantes en las épocas de inscripción y dan, además, preferencia, en la concesión de asientos, a las alumnas egresadas de sus propias escuelas de aplicación.

Todo esto, sin contar, señor presidente, con la importancia del papel que asume la mujer moderna en la vida profesional y en la cultura general del país. Las distintas facultades, y muy especialmente las de Medicina y de Filosofía y Letras, sin contar con los institutos de especialidades, se ven concurridas en una proporción a veces preponderante sobre la concurrencia masculina. Si las leyes tienden a la equiparación de los derechos de la mujer, a los que hasta hoy fueron privativos del hombre, es porque el grado de su instrucción y de su cultura intelectual la coloca en un mismo plano, en el ejercicio de las disciplinas del espíritu.

Por tanto, es un deber de gobierno propender a la creación de liceos o institutos preparatorios, sea para la vida universitaria, sea simplemente para la realización de una mayor cultura.

Basta consignar las breves consideraciones precentes para fundar el proyecto que someto a la aprobación de la Honorable Cámara.

Fernando Saguier.

—A la Comisión de Justicia e Instrucción Pública.

6

PRESIDENTE DE LA NACION PARA EL CASO DE ACEFALIA

Sr. Serrey. — Pido la palabra.

Antes de entrar al orden del día, propongo que se llenen las formalidades para elegir presidente de la Nación para caso de acefalia.

Sr. Presidente. — De acuerdo con la indicación que acaba de formular el señor senador por Salta, se va a proceder a tomar la votación nominal para la elección de presidente para caso de acefalia.

—Asentimiento.

—Votan por el señor senador Patrón Costas los señores senadores Serrey, Sánchez Sorondo, Landaburu, Martínez, Rothe, Vidal, Arenas, Figueroa, García Fernández, Caballos Reyes, Castro, Lubary, Caballero, Cepeda, Arrieta y López Peña.

—Votan por el señor senador Saguier los señores senadores Laurencena y Palacios.

Sr. Secretario (Figueroa). — Ha obtenido 16 votos el señor senador Patrón Costas y 2 votos el señor senador Saguier.

Sr. Presidente. — Queda designado presidente para caso de acefalia, el señor senador Patrón Costas.

El Senado debe considerar, en primer término, el veto del Poder Ejecutivo a la ley sobre despido por causa de matrimonio.

7

DESPIDO POR MATRIMONIO. — CONSIDERACION

—Se lee:

Despacho de la comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Legislación ha considerado el mensaje del Poder Ejecutivo, en el que formula objeciones al proyecto de ley nú-

mero 12.383, que prohíbe a los patrones, a las empresas concesionarias de servicios públicos y a las sociedades civiles y comerciales de cualquier naturaleza, el despido de su personal por causa de matrimonio; y, por las razones que expondrá el senador informante, os aconseja, en mayoría, confirmar vuestra sanción anterior.

Sala de la comisión, agosto 26 de 1938.

José H. Martínez. — Alfredo L. Palacios.

Despacho de la comisión en minoría

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Legislación ha considerado el mensaje del Poder Ejecutivo, en el que formula objeciones al proyecto de ley número 12.383, que prohíbe a los patrones, a las empresas concesionarias de servicios públicos y a las sociedades civiles y comerciales de cualquier naturaleza, el despido de su personal por causa de matrimonio; y, por las razones que expondrá el senador informante, os aconseja, en minoría, no confirmar el párrafo segundo del artículo 2º de vuestra sanción anterior, observado por el Poder Ejecutivo.

Sala de la comisión, agosto 26 de 1938.

Carlos Serrey.

Mensaje del Poder Ejecutivo

Buenos Aires, 22 de agosto de 1938.

Al Honorable Congreso de la Nación.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabilidad, haciendo uso de la facultad que le acuerda el artículo 72 de la Constitución nacional, para observar la disposición que establece el segundo párrafo del artículo 2º del proyecto de ley número 12.383, que prohíbe el despido por causa de matrimonio de empleados de comercio e industria, cuyo texto es el siguiente:

«Se presume, salvo prueba en contrario, que la cesantía es por causa de matrimonio si se produce dentro de los treinta días anteriores o de los doce meses posteriores a su celebración.»

El propósito que ha tenido en vista vuestra honorabilidad al sancionar el referido proyecto de ley, es loable y cuenta con el apoyo decidido del Poder Ejecutivo, pero considera que la presunción que establece la cláusula transcripta, que hace recaer sobre el patrón todo el peso de la prueba, es, además de injusta, antijurídica, porque crea una desigualdad entre las partes. Esta presunción

debe quedar librada al criterio de los jueces, en la apreciación de la prueba producida en el juicio.

Suponer que el patrón tiende sistemáticamente a burlar las disposiciones de una ley, en perjuicio de su personal, es crear la desconfianza en las relaciones entre empleados y patrones, en perjuicio de una bien entendida justicia social.

Estas razones determinan al Poder Ejecutivo a observar el proyecto de ley sólo en cuanto se refiere al segundo párrafo del artículo 2º.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

ROBERTO M. ORTIZ.
Jorge E. Coll.

Proyecto de ley N° 12.383

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Queda prohibido a los patrones, a las empresas concesionarias de servicios públicos y a las sociedades civiles y comerciales de cualquier naturaleza, dictar reglamentaciones internas y celebrar pactos o convenios que establezcan para su personal el despido por causa de matrimonio. Actos tales se reputarán nulos.

Art. 2º — Sin perjuicio de las acciones administrativas o judiciales que a los interesados correspondan por el derecho común o por otras leyes especiales, los empleadores indemnizarán a los cesantes por los daños que ocasionen su despido por causa de matrimonio, haya o no reglamentación, pacto o convenio que lo establezca. La indemnización por despido nunca será inferior al importe de un año de sueldos.

Se presume, salvo prueba en contrario, que la cesantía es por causa de matrimonio si se produce dentro de los treinta días anteriores o de los doce meses posteriores a su celebración.

Art. 3º — Las violaciones al artículo 1º de la presente ley, serán sancionadas con multa de mil a diez mil pesos moneda nacional por cada infracción. En caso de reincidencia, se aplicará el doble del máximo de la multa.

Art. 4º — La aplicación de las multas a que se refiere esta ley, se regirá en la Capital Federal y territorios nacionales, por el procedimiento establecido en la ley número 11.570 y en las provincias, por el juicio sumario que determinen sus respectivas leyes, y en cuanto al importe de las multas, ingresará a la Caja del Consejo Nacional de Educación o de los consejos provinciales.

Art. 5º — Se declara no comprendido en las disposiciones de esta ley, el personal de servicio doméstico.

Art. 6º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso argentino, en Buenos Aires, a 9 de agosto de 1938.

RAMÓN S. CASTILLO.

JUAN G. KAISER.

Gustavo Figueroa.

L. Zavalla Carbó.

Secretario del Senado.

Secretario de la C. de D.D.

Sr. Presidente. — En consideración en general.

Sr. Palacios. — Pido la palabra.

El Poder Ejecutivo, haciendo uso de la facultad que le acuerda el artículo 72 de la Constitución nacional, se ha dirigido al Congreso para observar la disposición contenida en el segundo párrafo del artículo 2º de la ley número 12.383, que prohíbe el despido por causa de matrimonio, y cuyo texto es el siguiente:

«Se presume, salvo prueba en contrario, que la cesantía es por causa de matrimonio, si se produce dentro de los treinta días anteriores o de los doce meses posteriores a su celebración.»

La comisión ha estudiado detenidamente el veto del Poder Ejecutivo y la mayoría aconseja a la Cámara, insistir en su sanción. Personalmente lamento la disidencia del ilustrado colega doctor Serrey, pero expreso, también, mi complacencia, por la adhesión al despacho del senador José H. Martínez, que integra la comisión en reemplazo del doctor Landaburu y cuyo talento e independencia de carácter son notorios.

Fundado el veto, el Poder Ejecutivo reconoce que el propósito tenido en vista para la sanción de la ley es loable y cuenta con su apoyo pero considera «que la presunción que establece la cláusula vetada, al hacer recaer sobre el patrón todo el peso de la prueba, es además de injusta, antijurídica, porque crea una desigualdad entre las partes».

Se plantea así, como nueva, una cuestión de carácter jurídico que, felizmente, ha sido resuelta hace más de medio siglo, en nuestra doctrina, en nuestra legislación especial —y será necesario decirlo, aunque parece ignorarlo el Poder Ejecutivo—, en nuestros códigos, como espero probarlo, si los señores senadores hacen el honor de escucharme.

Como la firma del primer magistrado en el mensaje, viene refrendada por un jurista, autor

de códigos, que es a la vez ministro de Instrucción Pública, todo lo que da una alta jerarquía intelectual, quiero hacer, en primer término, algunas consideraciones sobre la doctrina y la legislación social, que han sido olvidadas y que se refieren a este asunto. Después, entraré de lleno a demostrar que, de acuerdo a nuestros códigos, la afirmación del Poder Ejecutivo carece de sentido. Y ese olvido, respecto al carácter de la legislación del trabajo, especialmente, es lo que determina, con frecuencia, el apego a lo que se considera principios inmovibles de los códigos, sin tener en cuenta que ellos son una cristalización de normas que corresponden a un momento dado de la vida de un pueblo. Es la vida social que los crea. Pero la vida se transforma permanentemente; es un fluir constante. Los códigos, en cambio, mantienen su estructura y sus principios, como si fueran a regir siempre.

Así surgen los postulados inconcusos, a los que me referí en otra oportunidad en el Senado y a los que parece aferrarse el eminente jurista que refrenda el veto. Esos postulados tenían un hondo significado en el Código de Napoleón, del cual veremos cómo se ha apartado nuestro gran Vélaz Sársfield, Código de Napoleón, inspirado en el individualismo filosófico y el liberalismo económico, revolucionarios con Adam Smith al iniciarse la gran conmoción industrial de fines del siglo XVIII, pero que han perdido su sentido, en esta época en que el principio de igualdad interviene por exigencias impostergables de la vida.

El individualismo fué una reacción contra el despotismo. Este había determinado un sentimiento de reprobación contra toda ingerencia del poder público que significara una limitación a la libertad individual.

Los individualistas en economía, sostienen que la libertad es el principio más sólido para conseguir el bienestar social y toda restricción de la libertad, por eso, produce desazones. De ahí que resistan con tenacidad la sanción de las leyes del trabajo que ellos llaman injustas por ser restrictivas de la libertad.

Guerra a las restricciones, fué la consigna del liberalismo económico, porque de otra manera la producción no podía abastecer el mercado. Primero, los fisiócratas y después, Adam Smith con su admirable libro *La riqueza de las naciones*, defienden la libertad. Smith afirma que la mayor suma de bienestar colectivo provendrá de la acción libre del interés individual, sin creer, por eso, que el libre juego de las fuerzas económicas realizará automáticamente la

justicia, como parece creer en este caso, el Poder Ejecutivo con un liberalismo económico inexplicable cuando toda su política económica, con las juntas reguladoras, es la negación de aquél.

Y la libertad se exagera como consecuencia del nuevo régimen de producción y ella trae la explotación del material humano. Había desigualdades muy grandes entre los nuevos factores, y por eso la libertad absoluta no podía asegurar por sí sola, la armonía colectiva.

Si dos hombres tienen fuerzas iguales, no es menester que la ley intervenga para impedir el perjuicio mutuo, porque el interés común les invita al comedimiento y a la discreción.

Pero si las fuerzas de esos dos hombres son desiguales y los dejáis libres, el más robusto estropeará al más débil. La libertad sin freno será causa de brutalidad y usurpación, si hay desigualdad en las fuerzas individuales. Y eso sucedió, con la libertad liberticida. El gran diario inglés «The Times» consignaba hace más de un siglo, estas palabras: «La salud física y moral de la familia obrera fué sacrificada y en un par de generaciones la raza habría degenerado si no se hubiera producido una reacción.»

Viene la reacción, y se restringe la libertad liberticida y aparecen las primeras manifestaciones de legislación del trabajo. Y lo curioso es que sea la individualista Inglaterra la que comienza dictando las primeras leyes del trabajo, leyes que después aceptaron y ampliaron los demás países civilizados.

Volvimos así a las restricciones abolidas por el individualismo económico, a las formas anteriores, pero impuestas sobre materiales históricos distintos.

Las leyes sociales implican restricciones a la libertad desenfrenada de los que no paran mientes ni en la salud ni en la vida de los hombres, ni en las instituciones fundamentales de la sociedad; restricciones al libre juego de las fuerzas naturales que determinan la explotación. No se explican, ahora, los retardados discípulos de Adam Smith.

Los códigos inspirados en el individualismo del siglo XVIII han prescripto la libertad de contratación. No han podido hacer otra cosa. Si los hombres eran absolutamente iguales, naturalmente bastaba con la libertad. Así los contratos se harían sobre la base de valores iguales y ambos contratantes tendrían, por lo tanto, iguales ventajas.

Pero es que el empleado no está en condiciones de igualdad respecto al empleador, desde

que, obligado a buscar su subsistencia, tiene que vender su trabajo.

La construcción jurídica de las relaciones entre empleado y empleador, dentro del derecho común, está basada sobre la libertad de contratación, pero la legislación del trabajo, legislación de excepción, desconoce y anula ese principio. He dedicado parte de uno de mis libros para demostrar lo que dejo expresado, pero me interesa que los señores senadores no puedan aducir que mi argumentación es tendenciosa. Por eso, citaré otra opinión.

Un profesor argentino que ha representado al país en los congresos internacionales del trabajo, cuyo espíritu religioso es conocido, y que ha compartido conmigo la cátedra de legislación del trabajo en la Universidad de Buenos Aires, dice en su importante tratado sobre la materia, que si realmente existiera una libertad de contratar entre obreros y patrones, el dominio de la legislación aparecería reducido a funciones de policía del trabajo. Y agrega: «Reconócese en la actualidad por la mayoría de los escritores, que aquella libertad está ausente en razón de que no existe igualdad de condiciones. La diferencia de los medios de que los dadores y los tomadores de trabajo disponen, les crean situaciones esencialmente diferenciales. Pueden los unos abusar de su derecho y los otros, apenas hacerlo valer. La necesidad inherente a los que no tienen otra propiedad que su trabajo, les obliga a tomarlo aun en condiciones no deseables, a fin de obtener el salario indispensable para el sustento de su vida.

«La creencia teórica de que el valor del trabajo y las condiciones en que ha de ser prestado, se discuten y convienen libremente, entre las partes, como en los restantes contratos no pasa de ser un error que la simple observación de los hechos destruye. En planos tan distintos colocados, es la voluntad del más fuerte la que se convierte en ley.»

Observen los señores senadores que ésta es la opinión del doctor Unsain, colaborador del Poder Ejecutivo en la mayor parte de los proyectos sobre legislación del trabajo enviados al Congreso.

Por otra parte, es absurdo considerar al contrato de servicios como si fuera un contrato de compraventa, en que sólo se trata de cosas. Se cree que así como el vendedor no debe dar más que el par de zapatos encargados y el comprador sólo el precio estipulado, la obligación del patrón debe limitarse al salario y la del obrero al servicio convenido.

Menger, el eminente juriconsulto, profesor de la Universidad de Viena, dedicó un capítulo de su más famoso libro para demostrar que tal estipulación es insuficiente, pues en los contratos referentes a servicios no pueden éstos estar separados de la individualidad del obrero que representa un valor absoluto.

Mucho antes, Ruskin, poeta y economista, había dicho que el trabajador es una máquina, pero una máquina que tiene como fuerza motriz un alma y que la potencia de este agente particular interviene como cantidad desconocida en todas las ecuaciones de los economistas, a despecho suyo, errando todos los resultados.

Y mucho después, el Tratado de Versalles proclamó que el trabajo no es una mercancía, lo que implica el reconocimiento de la personalidad moral del obrero.

El Código de Napoleón, que consagraba los derechos de una clase dominante, declaró expresamente que el grande y principal objeto del código era regular los principios y los derechos de la propiedad e hizo, en efecto, de la propiedad, la base de la organización familiar y contractual.

Porque la libertad de contratar del obrero es muy limitada, se quiso restablecer el equilibrio entre los contratantes y se dictó la legislación del trabajo. Se trata, en realidad, de un nuevo derecho.

Joaquín V. González, dijo en 1904: «Examinadas con honda atención todas las secciones del Código Civil, en las cuales se ha estatuido sobre obligaciones, hechos, actos jurídicos, contratos, se llega a la conclusión de que por abundancia de reglas generales, sin la presencia de los casos y por indeterminación, falta de exactitud y referencia directa a los mismos, la vida del taller, de la fábrica, de la grande industria del día, no tiene en sus disposiciones una norma precisa y ante la regla de aplicación de las leyes, según la constancia de autos o los antecedentes del proceso, todas las formas y modos de ejecución del contrato de trabajo que no son los que nominativa y restrictivamente se denominan alquiler de servicio o de obra, escapan a su previsión y a su aplicación por los jueces, y lo propio puede decirse de la responsabilidad por el daño que cause el accidente, pues en todo el conjunto de reglas de admirable previsión doctrinaria abstracta, no encuentra el juez, en el conflicto, el precepto claro y distinto que rija la materialidad y la realidad del hecho o caso producido.»

Injusto sería, sin embargo, no reconocer que la obra del codificador argentino fué de enor-

me importancia en la época para la que se dictó, y que entonces se ajustaba a las exigencias del relativo progreso conquistado por la República.

El gran Vélez reflejó los sentimientos y las ideas de su ambiente y en presencia de la tradición colonial y de la red inextricable de leyes que nos legara España, con su código adaptó las normas jurídicas a las transformaciones políticas y sociales que se habían operado en el país.

La aparición de nuevos hechos económicos, está en pugna con algunas concepciones teóricas del código sancionado, en una época distante de la actual, pero lo que no se puede negar, es la clarividencia del gran cordobés Vélez, cuando no incluyó en el código, instituciones relativas al trabajo.

Los doctores Unsain y Rivarola, consideran que el silencio de nuestro código respecto de hechos y derechos que en Europa, en la época de su sanción, 1870, se hallaban en plena discusión, lejos de ser un mal, constituye un bien. Si Vélez Sársfield hubiera incluido en el código instituciones obreras les hubiera dado un carácter estable, convirtiéndolas, de pronto, en anticuadas y obligando el cambio completo y, por ende, difícil, de todo un cuerpo de legislación.

Vélez Sársfield, con una visión maravillosa, con verdadera clarividencia, como no sólo era un juriconsulto, sino, también, un estadista que veía las transformaciones producidas en los pueblos por la acción de las fuerzas históricas, redactó la disposición del artículo 1.624 donde establece que el servicio de las personas de uno y otro sexo que se conchaven para el servicio doméstico, será juzgado por ordenanzas municipales o policiales de cada pueblo, y que serán, también, juzgadas por disposiciones especiales, las relaciones entre los artesanos y aprendices y las entre los maestros y discípulos.

¿No significa esto, reconocer la necesidad de una legislación de excepción para regir esas relaciones? El estadista Vélez, codificador argentino, expresa así su pensamiento respecto a la legislación del trabajo que él presentía como indispensable fuera del código.

Bialet Massé decía que el derecho de los trabajadores podía hacerse sin tocar para nada el código.

Tan cierto es esto que así se ha hecho, afirma un profesor de legislación del trabajo, y que las ya numerosas leyes en vigor están al margen del derecho común; se mueven en otro

plano, se inspiran en otros principios, responden a otras necesidades bien diversas y tienen un devenir distinto.

Véase la ley de accidentes del trabajo que aceptó la teoría del riesgo profesional, también tachada de antijurídica, aunque no por el Poder Ejecutivo y menos por un ministro de Instrucción Pública.

El concepto jurídico en materia de responsabilidad, había cambiado. El sistema de la culpa delictual fué, primero, reemplazado por el sistema de la responsabilidad contractual, con una presunción *juris tantum*, en contra del patrón. Por la teoría de la inversión de la prueba, la responsabilidad no surge del cuasidelito sino del contrato de locación de servicios. No es ya el empleado o el obrero quien debe probar la falta del patrón; al contrario, se presume siempre, la falta del patrón.

Pero esto no bastó. La inversión de la prueba, considerada como antijurídica debió ser supe-
rada porque todavía estaba dentro del dominio de la culpa. No era la culpa aquiliana, la culpa del derecho romano, pero era la culpa delictual. Y fué menester abandonar, para siempre, las teorías subjetivas de la responsabilidad, para reemplazarlas por la teoría objetiva, que aportara un concepto de equidad, de verdadera justicia.

Y así se llegó a la teoría del riesgo profesional, que está hoy incorporada a nuestras leyes y que, sin duda, violenta un principio que se creía inmovible.

Las leyes del trabajo son leyes de excepción y, en tal concepto, se dictan en todos los países del mundo. Se trata de evitar una desigualdad.

La diferencia que existe entre los que poseen y los que nada tienen, para conseguir su derecho, es extraordinaria, y ha sido frecuentemente olvidada por los jurisconsultos. De ahí, también, que haya sido necesario establecer procedimientos de excepción, de manera que los pobres puedan defender su derecho, pues la mayor desigualdad consiste en tratar de igual modo a los que son desiguales.

Y una ley no sería nunca eficaz si no se garantizara su aplicación. La técnica de la aplicación es tan importante como los principios de fondo. Muchas leyes fracasan por carecer de los órganos necesarios para darles una sanción rápida.

Todo cuanto acabo de exponer tiene el propósito de demostrar que las leyes tuitivas de los trabajadores constituyen un nuevo derecho. No están dentro de la legislación ordinaria o

común, y, por lo tanto, resulta absurdo decir que una ley del trabajo es antijurídica e injusta porque no coloca en pie de igualdad absoluta al patrón y al obrero. Ya he dicho que no hay mayor desigualdad que la de tratar como iguales a los desiguales. Este era el concepto individualista exagerado que proclamó la revolución francesa y que acentuó el liberalismo económico ya superado.

Pero voy a refutar al Poder Ejecutivo en su propio reducto.

No quiero invocar un nuevo concepto del derecho, para sostener que las afirmaciones del poder que ejerce el veto, carecen en absoluto de fundamento. Lo demostraré con el código en la mano.

En efecto; el veto del Poder Ejecutivo se funda en que la presunción establecida en el artículo 2º es injusta y antijurídica porque hace recaer sobre el patrón todo el peso de la prueba, creando así una desigualdad entre las partes.

Pero, ¿ha olvidado el Poder Ejecutivo que la inversión del cargo de la prueba se establece, expresamente, en una serie de disposiciones de derecho civil, sin que baste esta circunstancia para considerar que cada caso sanciona una injusticia? ¿Olvida el Poder Ejecutivo que en situaciones más delicadas que ésta, se ha hecho aplicación del principio de la inversión de la prueba?

Aquí está el código. Veamos cómo se consagra categóricamente el régimen de las presunciones.

Artículo 75. (De la existencia de las personas antes del nacimiento). — «En caso de duda de si hubieran nacido o no con vida, se presume que nacieron vivos, incumbiendo la prueba al que alegare lo contrario.»

Artículo 245. (De los hijos legítimos). — «La ley presume que los hijos concebidos por la madre durante el matrimonio tienen por padre al marido.»

Artículo 283. (De la patria potestad). — «Se presume que los hijos de familia adultos si ejercieren algún empleo público o alguna profesión o industria, están autorizados por sus padres para todos los actos y contratos concernientes al empleo público o a su profesión o industria.»

Artículo 500. (De la naturaleza y origen de las obligaciones). — «Aunque la causa no esté expresada en la obligación, se presume que existe, mientras el deudor no pruebe lo contrario.»

Artículo 878. (De la remisión de la deuda). — «Siempre que el documento original de don-

de resulte la deuda se halle en poder del deudor, se presume que el acreedor se lo entregó voluntariamente, salvo el derecho de éste a probar lo contrario.»

Artículo 887. — «La existencia de la prenda en poder del deudor hace presumir la devolución voluntaria, salvo el derecho del acreedor a probar lo contrario.»

Artículo 920 (De los hechos). — «La expresión de la voluntad puede resultar igualmente de la presunción de la ley en los casos que expresamente lo disponga.»

Artículo 961 (Del fraude en los actos jurídicos). — «Todo acreedor quirografario puede demandar la revocación de los actos celebrados por el deudor en perjuicio o en fraude de sus derechos.»

Artículo 962. — «Para ejercer esta acción es preciso: 1º Que el deudor se halle en estado de insolvencia. Este estado se presume desde que se encuentra fallido.»

Artículo 969. — «El ánimo del deudor de defraudar a sus acreedores por actos que les sean perjudiciales, se presume por su estado de insolvencia. La complicidad del tercero en el fraude del deudor se presume, también, si en el momento de tratar con él conocía su estado de insolvencia.»

Artículo 1.044 (De la nulidad de los actos jurídicos). — «Son nulos los actos jurídicos en que los agentes hubiesen procedido con simulación o fraude presumidos por la ley.»

Artículo 1.116 (De las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que no son delito). — «Los padres no serán responsables de los daños causados por los hechos de sus hijos, si probaren que le ha sido imposible impedirlo. Esta imposibilidad no resultará de la mera circunstancia de haber sucedido el hecho fuera de su presencia si apareciese que ellos no habían tenido una vigilancia activa sobre sus hijos.»

Artículo 1.124 (De los daños causados por animales). — «El propietario de un animal doméstico o feroz, es responsable del daño que causare. La misma responsabilidad pesa sobre la persona a la cual se hubiere mandado el animal para servirse de él, salvo su recurso contra el propietario.»

Artículo 1.133 (De los daños causados por cosas inanimadas). — «Cuando de cualquier cosa inanimada resultare daño alguno, su dueño responderá de la indemnización, si no prueba que de su parte no hubo culpa...»

Artículo 1.627 (De la locación de servicios). — «El que hiciere algún trabajo o prestare algún servicio a otro, puede demandar el pre-

cio aunque ningún precio se hubiere ajustado, siempre que tal servicio o trabajo sea de su profesión o modo de vivir», etcétera.

Artículo 1.628. — «Si el servicio o trabajo no fuese relativo a la profesión o modo de vivir del que lo prestó, sólo tendrá lugar la disposición del artículo anterior, si por las circunstancias no se presumiese la intención de beneficiar a aquél a quien el servicio se hacía. Esta intención se presume cuando el servicio no fué solicitado o cuando el que lo prestó habitaba en la casa de la otra parte.»

Artículo 1.871 (Del mandato). — «El mandato puede ser gratuito u oneroso. Presúmese que es gratuito cuando no se hubiere convenido que el mandatario perciba una retribución por su trabajo. Presúmese que es oneroso cuando consista en atribuciones o funciones conferidas por la ley al mandatario y cuando consista en los trabajos propios de la profesión lucrativa del mandatario o de su modo de vivir.»

Artículo 2.353 (De la posesión y de la tradición para adquirirla). — «Nadie puede cambiar por sí mismo ni por el transcurso del tiempo la causa de su posesión. El que comenzó a poseer por sí y como propietario de la cosa, continúa poseyendo como tal, mientras no se pruebe que ha comenzado a poseer por otro. El que ha comenzado a poseer por otro, se presume que continúa poseyendo por el mismo título, mientras no se pruebe lo contrario.»

Artículo 2.362. — «Todo poseedor tiene para sí la presunción de la buena fe de su posesión hasta que se pruebe lo contrario, salvo los casos en que la mala fe se presume.»

Artículo 2.412 (Efectos de la posesión de cosas muebles). — «La posesión de buena fe de una cosa mueble crea a favor del poseedor la presunción de tener la propiedad de ella y el poder de repeler cualquiera acción de reivindicación si la cosa no hubiese sido robada o perdida.»

Artículo 2.414. — «La presunción de propiedad no puede ser invocada por la persona que se encuentre en virtud de un contrato o de un acto lícito o ilícito, obligada a la restitución de la cosa.»

Artículo 2.415. — «Tampoco puede ser invocada respecto a las cosas muebles del Estado general o de los Estados particulares, ni respecto a las cosas accesorias de un inmueble reivindicado.»

Artículo 2.567 (De la apropiación). — «Se presume que los objetos de reciente origen pertenecen al dueño del lugar donde se encontraren,

si él hubiese fallecido en la casa que hacía parte del predio.»

Artículo 2.719 (Del condominio de los muros, cercos y fosos). — «La medianería de las paredes o muros no se presume sino cuando dividen edificios y no patios, jardines, quintas, etcétera, aunque éstos se encuentren cerrados por todos sus lados.»

Artículo 2.791 (De la reivindicación). — «Cuando el reivindicante y el poseedor contra quien se da la acción presentaren cada una títulos de propiedad dados por la misma persona, el primero que ha sido puesto en posesión de la heredad que se reivindica, se reputa ser el propietario.»

En todas estas prescripciones del Código Civil se establece la inversión del cargo de la prueba. ¿Son injustas? ¿Son acaso antijurídicas? Evidentemente, no.

Menos aún puede atribuirse ese alcance en leyes de protección social, en las que la intervención del legislador se acentúa para no admitir el juego corriente de las voluntades autónomas, la libertad amplia de contratar o los principios habituales del comercio jurídico.

La ley que castiga el despido por matrimonio nació impuesta por una necesidad real. Tiende a impedir y a reparar una práctica antisocial, más o menos generalizada, y a aplicar una sanción a su mantenimiento. Quienes atacan con torpeza la constitución de la familia son, principalmente, las empresas extranjeras, concesionarias de servicios públicos, como lo demostré antes de ahora en el Senado.

El despido por matrimonio no constituye, según lo ha expresado el presidente de la Unión Industrial Argentina, en nota dirigida al primer magistrado, una modalidad de los establecimientos industriales, propiamente dichos, lo que hace inexplicable que ellos hayan solicitado el veto inconsulto.

Tratándose de una ley de reajuste, ésta que discutimos presenta dos aspectos que conspiran contra su admisibilidad sin protesta y su observancia regular. Uno, es el de contrariar lo que, actualmente, se hace por interés económico. El otro, es el carácter punitivo con que se asegura su efectividad. Es lógico, entonces, que el legislador rodee su decisión del mayor número de garantías para que su violación resulte lo más remota posible y no se malogre la iniciativa.

El legislador civil reputa, especialmente prohibida y por lo tanto nula, la cláusula que haga depender la suerte de una relación jurídica, de cualquier limitación a la libertad de casarse.

En presencia de los casos determinantes de la sanción de esta ley número 12.383, en los cuales se aplica pena de cesantía, a la empleada que contrae matrimonio, aunque sea idónea y correcta, no parece injusto que se lleve hasta los límites extremos la protección legal que estimula la constitución de la familia.

Tengo aquí sobre mi pupitre un trabajo publicado por la Dirección General de Estadística, sobre la población y el movimiento demográfico de la República Argentina.

En la página 71 consta la disminución de los matrimonios en el último año, lo que realmente debe alarmarnos. En la página 21, se registra el crecimiento vegetativo en 1937, de la Capital Federal: 12,08 por mil habitantes; cifra inferior a la de 1936.

La merma es significativa si se observa que de un término medio de 20,79 ‰ en el quinquenio de 1910-1914 se ha llegado, como he expresado, a un 12,08 ‰ en 1937.

Comentando las estadísticas de la Dirección General, «La Nación», del 29 de agosto pasado, en un editorial que menciono, porque favorece mis conclusiones, dice, que los fallecidos en los primeros cinco años, en La Rioja, representan el 23,63 % de los nacidos vivos; en Salta, el 27,44 %; en Jujuy, el 31,77 %, y esta constancia debe provocar, por cierto, medidas de gobierno determinadas, en defensa de la vida de núcleos importantes de la población nacional. Es evidente, agrega el diario mencionado, que cuando un pueblo ve perecer en los primeros cinco años de su existencia cerca de la tercera parte de los nacidos, algo anda mal en su estructura económica. En las páginas 62 y 63 del trabajo de la Dirección General de Estadística, que he citado y que pongo a disposición de los señores senadores, aparecen los nacimientos registrados en la Capital Federal y provincias, en los años 1931 a 1937. Véase: 1931: 310.355; 1932: 311.737; 1933: 293.764; 1934: 291.000; 1935: 291.962; 1936: 288.362; 1937: 266.105.

«La Nación», del 29 de agosto, da la voz de alarma, que se escuchará con estupor en todo el país. El censo de la población de la ciudad de Buenos Aires, realizado en octubre de 1936, puso en evidencia una realidad ignorada por muchos; era la referente al extraordinario descenso del índice de natalidad, antes uno de los más elevados del mundo, —y eso nos enorgullecía—, y reducido ahora en proporción asombrosa. En la Capital existen 260.716 jóvenes comprendidos entre los 25 y 29 años, y sólo 165.717 niños menores de cinco años.

Habla el gran diario conservador, de una honda crisis social, cuyas causas son de orden moral y económico, principalmente.

Presten atención los señores senadores, porque se trata de un grave problema en el que va envuelto todo nuestro porvenir. Dice «La Nación»: «Lo normal sería hallar cifras cada vez menores, a medida que los grupos abarcan personas de más edad. Las consecuencias de tal estado de cosas no se experimentan aún, pero en caso de continuar este proceso, pronto tendremos una mayoría de gente de edad, y una minoría de jóvenes, rasgo característico de una sociedad decadente. Efecto inmediato de esa composición de la población es una mayor lentitud en el ritmo del progreso.» Luego, se refiere al Poder Ejecutivo que acaba de lamentarse, públicamente, de este hecho, acaso recordando, como en otra oportunidad, «la vieja familia criolla de muchos hijos», y agrega: «No es propio de los gobiernos lamentar situaciones sobre las cuales pueden actuar y no actúan. Mientras el Poder Ejecutivo expone, públicamente, su preocupación por la disminución de la natalidad, nada hace para evitarla.»

Con el veto de esta ley, el Poder Ejecutivo contribuirá, eficazmente, a que el número de nacimientos sea todavía menor. El problema reviste gravedad evidente. Hay grandes empresas extranjeras que no tienen ningún interés en el progreso moral de la Argentina. No me refiero ya a los industriales argentinos, para quienes no es costumbre despedir a los empleados por causa de matrimonio y que, por lo tanto, nada deben temer de la ley.

Yo he denunciado con toda claridad, en el Senado, las maniobras de las grandes empresas en contra de la familia, institución básica de la sociedad y del Estado, y que en su aspecto moral y social ha sido descuidada por las autoridades y por las leyes, olvidando que en esa organización primaria se desenvuelven los más nobles sentimientos de abnegación, de sacrificio y de fraternidad, síntesis del espíritu cristiano.

La protección a la familia, no en su relación con la propiedad, que ya existe ampliamente legislada, sino en su sentido moral, debe ser ejercida por todos los poderes en contra de los enemigos de la patria que aspiran a hacer de nosotros una miserable factoría.

Y no ha faltado, señores senadores, cuando he expresado reiteradamente esta aspiración que estoy seguro ha de realizarse alguna vez,

no ha faltado quien la considerase tendenciosa y demagógica. Ya veremos que no es así.

En una nota enviada por una poderosa empresa ferroviaria al Poder Ejecutivo, expresando su opinión en contra de esta ley, se consignaban estas palabras que deben meditar los señores senadores, cuyos sentimientos religiosos os son conocidos. «Por razones que no es del caso mencionar, la mujer casada pone, involuntariamente, en conocimiento de otras personas los hechos en que actúa. En un país de tan profunda raíz religiosa como éste, la sumisión espiritual de la mujer casada es notoria.»

Así justifican las empresas, el despido por causa de matrimonio que yo calificué severamente.

El director de la revista «Criterio», monseñor Gustavo Franceschi, bajo el título sugestivo de «Moloch», publicó en el número 518, de febrero de 1938, un editorial en que se ocupa de la soltería impuesta por las empresas a sus empleadas, y dice: «O renunciar a constituir un hogar, o a la calle, he aquí la disyuntiva que plantea a las niñas argentinas que trabajan en sus escritorios, una serie de empresas extranjeras. Lástima que no haya sido propuesta la cuestión, tiempo ha conocida, por alguno de los legisladores de una u otra Cámara que llevan por lema «Dios, patria y hogar» y que un socialista haya debido defender la familia así atacada.» Y agrega estas palabras que debieran conocer los adoradores de Moloch que me acusaron de demagogo, por haber planteado y defendido esta cuestión en el Senado. «La estricta justicia me obliga a felicitar al doctor Palacios cuya tesis en su discurso del 27 de enero coincide en todo, con la más pura doctrina católica.»

Sólo faltaría ahora, que del otro extremo, se me considere traidor. El director de «Criterio», recoge el pretexto aducido por las empresas para despedir a sus empleadas que se casan, y se pregunta por qué había de ser menos discreta una mujer, frente a su esposo, que frente a su padre, a su novio... o a su amante. «Las compañías no prohíben que los tengan las empleadas —dice valientemente—, y si éstas se amanceban, aquéllas nada tendrán que decir. Lo único vedado es el matrimonio, lo demás es friolera. Y desde el punto de vista estrictamente económico, las compañías tienen razón. En efecto, una mujer que vive en concubinato o que mantiene relaciones transitorias con un hombre cualquiera, evitará que todo ello traiga consecuencias, y si llega a padecerlas no tiene la empresa por qué respetar dere-

chos que la ley sobre el trabajo de las mujeres, otorga sólo a las casadas. Por lo cual en nada le interesa la vida inmoral. El matrimonio, he aquí el enemigo. Todo ello conspira, directamente, contra el interés de la Nación y merece el calificativo de inmoralidad que le aplicó el doctor Palacios. Pero el materialismo capitalista — observen los señores senadores que es un sacerdote el que habla —, el materialismo capitalista, individualista por definición, debe, también, por definición, sobreponer el interés particular al común; de lo contrario no sería individualismo propiamente dicho. Decaiga, entonces, la cifra de la natalidad, pero no sufra merma alguna, la cifra de los ingresos.»

Y luego, como para probar que la proposición del diputado Courel del sector Demócrata Nacional en el sentido de ampliar la ley vetada, a los hombres, tiene algún valor, el director de «Criterio» relata este hecho digno de meditar: «Hace algún tiempo, un joven que yo conozco, empleado de Banco y que deseaba contraer matrimonio, presentó al gerente, exponiéndole que en sus años de servicio, que eran más de diez, nunca había sido objeto de una sola observación y solicitando un leve aumento de salario para poder hacer frente a las nuevas obligaciones que pensaba contraer. «Vea amigo, si no tiene para casarse, busque una amiga o arréglese como le parezca; el Banco no tiene por qué interesarse en su vida.» Tal fué la respuesta que recibió este hombre, quien con lágrimas en los ojos me decía: «Cómo quiere usted que un día u otro no castigemos a estos explotadores que cobran sueldos enormes y reparten abundantes dividendos, pero no nos pagan lo suficiente para constituir un hogar?» No ignoro que tales hechos no ocurren en todas partes, pero la gravedad del caso finca en que el ambiente los admite.»

Y termina el director de «Criterio» con estas palabras que me impresionaron vivamente: «Las mujeres que trabajan en las empresas serán expulsadas si llegan a casarse, a pesar de la ley. Hecha ésta, hecha la trampa, y siempre se hallará manera de violar sus disposiciones, si la conciencia, severamente formada, no alcanza a dominar la concupiscencia del dinero.»

Como esto último es una tarea superior a nuestras fuerzas, y exige una obra lenta y larga, era menester revestir a la ley de todas las garantías para evitar los subterfugios que permitirían a los empleadores de mala fe — que para los de buena no eran menester — escapar a las obligaciones que imponía la ley.

De ahí la prescripción vetada, propuesta en la Cámara de Diputados por legisladores de la Concordancia, doctores Fassi y Aguiar, ambos profesores de derecho en universidades argentinas.

Se trata de una presunción *juris tantum* que puede ser destruída por la prueba del empleador, prueba fácil que consiste en establecer la causa de la cesantía. Y a poco que se medite sobre la realidad de lo que dejo expresado, ha de advertirse que es muy leve lo que se compromete con el mantenimiento de la presunción. Los patrones que dieron motivo a la ley o que pretendieran violarla en lo sucesivo, no pueden merecer ninguna consideración del legislador. Los que respetan sus prohibiciones o no la contrariaron en su espíritu, antes de existir, cuentan con la prueba de la causa efectiva de la cesantía porque obran de buena fe y, entonces, la molestia de exhibir una prueba fácil, es ínfima, frente a las garantías que representa para las víctimas de los patrones que persistan en violar la disposición legal.

Las leyes del trabajo se caracterizan por no ajustarse a los principios básicos en materia de prueba y de libertad contractual.

Existen derechos cuya renuncia no se permite: artículo 13, ley número 9.688; artículo 8º, ley número 11.729; artículo 10, ley número 11.278. En materia de responsabilidad se presume la del patrón: artículo 5º, ley número 9.688, aun derivada de la sola presencia de menores o mujeres en sitios de trabajo que no le están permitidos; artículo 12, ley número 11.317.

El artículo 2º vetado, se ajusta a esa política legislativa de protección. Atribuir el cargo de la prueba a una u otra parte, no es una solución antijurídica, como afirma equivocadamente el Poder Ejecutivo. Siempre uno de los contradictores debe probar y el otro no. El determinar cuál de ellos carga con esa obligación, es asunto que depende de infinidad de circunstancias y que hacen más a las leyes de la prueba, que a las soluciones de fondo.

Bentham, proponía que no fuese el actor sino el demandado quien debiese probar, porque lo normal es que sólo demanden los que tienen razón. La norma procesal es la inversa, pero el legislador se ha reservado la potestad de contrariarla, creando presunciones que transfieren el deber de probar a la parte contraria.

Sería antijurídico si se permitiese a una parte, pruebas que la otra no puede invocar, o si de aquellos aspectos comunes de la prueba, se excluyera a una de ellas o se aplicaran unilateralmente.

En este caso, el legislador ha impuesto el cargo de la prueba al patrón, por las razones que anteceden, y porque cuando obra de buena fe tiene que resultarle muy fácil aportar la prueba contraria, que se le exige.

El no debe probar hechos negativos ni indeterminados, sino algo muy concreto: la causa real de una cesantía. No se le crea ninguna dificultad seria.

Las observaciones no se presentan como decisivas y, en cambio, el artículo vetado consolida los beneficios de una ley de gran sentido ético y de indudable justicia social.

Por todas estas consideraciones, la mayoría aconseja al Senado que confirme su sanción. Entendemos, así, defender a la familia argentina, protegiendo el patrimonio moral de los que contribuyen con sus hijos al fortalecimiento de la patria. (*¡Muy bien! en las bancas.*)

Sr. Serrey. — Pido la palabra.

He escuchado con la misma complacencia, seguramente, que los demás señores senadores, la magnífica exposición doctrinaria del señor senador por la Capital, respecto del origen y de las condiciones que debe revestir la legislación del trabajo.

No he de seguir en su desarrollo al miembro informante de la mayoría, por cuanto todos estamos convencidos de eso y por cuanto quiero reducirme a un análisis jurídico de los artículos objetados, para demostrar cómo esta ley, tal cual se ha sancionado, atenta a la igualdad y a la justicia. Tampoco tengo nada que decir respecto de las estadísticas y de los antecedentes relativos a la familia, porque ellos podían haber sido tenidos en cuenta cuando se discutió la ley misma y no con este motivo. Y a ese respecto debo decir que el proyecto que presentó el señor senador por la Capital, es una de las iniciativas que lo honran y que se agregan a las muchas que en el mismo Senado tiene ya presentadas.

Por eso ha sido recibido con general beneplácito de la opinión. A nadie podía escapar que era inaceptable el hecho de que empresas beneficiadas por concesiones del Estado pudiesen tratar de prevenir o impedir el matrimonio de su personal del sexo femenino, únicamente con el fin de evitarse la protección legal que puede dispensarse, a las que llegan al estado de gravedad. Semejantes medidas conspiran contra los fundamentos mismos de la nacionalidad. Eso motivó el voto unánime del Senado, y si la ley hubiera quedado sancionada tal como éste la aprobó, nadie sería capaz de objetarla.

Pero llegado el asunto a la Cámara de Diputados, se le han introducido tales modificaciones, con un criterio tan parcial y exclusivo, que le han quitado todo sentimiento de justicia.

Desde luego, llama la atención que se incluya en esta protección a los empleados del sexo masculino. Nadie ha asegurado y nadie puede creer que a un empleado varón se le despidiera porque contraiga matrimonio, ni que las empresas puedan tener ningún motivo para hacerlo, cuando, al contrario, la regularidad de vida que impone el matrimonio da mayores garantías de capacidad y de asiduidad. No voy a insistir sobre este punto —que es claro—, porque no está incluido en el veto del Poder Ejecutivo. Después, además de las reglamentaciones útiles, se establece un mínimo, lo que es saludable, pero se lo lleva a un límite visiblemente exagerado y, por último, se sienta la presunción que ha motivado el veto del Poder Ejecutivo, la cual no resiste el análisis más simplista.

Consiste en la presunción *juris tantum* de que el despido tiene por causa el matrimonio, siempre que él se realice un mes antes de su celebración o doce meses después de haberse celebrado. He recurrido al Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados para averiguar cuál es la razón invocada por el miembro informante. Este —que es el diputado Ruggieri—, hace su exposición, siempre medulosa y elocuente, y llegado a este punto, dice solamente: «También hemos querido evitar subterfugios que permitan a los empleadores de mala fe escapar a las prohibiciones u obligaciones que impone esta ley. Me refiero a la posibilidad de que se disponga el despido sin invocar la causa matrimonial aunque ésta sea, en realidad, la determinante de la cesantía. El despacho establece la presunción de que el despido es por causas de matrimonio si se produce dentro del plazo que yo he mencionado».

Esas son todas las razones que da el miembro informante. Para evitar subterfugios de los malos empleadores y porque se suponga que haya alguien capaz de valerse de este procedimiento, se envuelve en la suspicacia a todos los comerciantes, a todos los empresarios y a todos los industriales que tengan personal a sus tareas.

Bien, señor presidente, razón tiene el Poder Ejecutivo de decir que esta prescripción es antijurídica, porque lo es todo aquello que atenta contra la igualdad ante la ley y ante las formas de aplicarla.

No hay razón alguna para suponer que todos los empleadores se hayan de valer de procedimientos de esta naturaleza, como la de invocar falsamente como causa de despido otras que no sean la de matrimonio de sus empleados.

Dejando que cada cual pueda probar los hechos que hagan a su derecho y dándole la amplitud de los medios de defensa que están puestos a disposición de todos, se habrá llegado al perfecto equilibrio, que es la forma de establecer la igualdad ante la ley en su aplicación por la justicia.

La prescripción a que me refiero, está agravada con la glosa del miembro informante de la Cámara de Diputados, que agrega: «Con la aclaración que esta última prueba no podrá referirse a causas generales de mejor servicio, de economía, de disminución de trabajo, etcétera; en esos casos, la presunción de la ley no tiene réplica; la prueba contraria deberá referirse a hechos concretos que hagan imposible, por culpa del empleado u obrero la continuación del contrato de empleo o de trabajo.»

Yo comprendo, señor presidente, que se estableciese una presunción de esta naturaleza, si se pudiera probar que los empleados tienen más dificultad que los empleadores para rendir la prueba que haga a su derecho, porque haya una especie de coacción o inconvenientes para producir sus elementos de prueba. Pero si vamos a la realidad de las cosas los empleadores son los que tienen más dificultad para producir la prueba. Lo ha determinado así la experiencia de la aplicación de la ley número 11.729.

Ya lo hace notar, con razón, uno de los memoriales presentados solicitando el veto de esta ley, cuando dice que los actos de indisciplina, las irregularidades de conducta de los empleados, se producen sin testigos o tienen como únicos, a los otros empleados, los que llamados a declarar no lo hacen, por razones de compañerismo, o si declaran a favor del patrón se ven comprendidos en la tacha de las generales de la ley por encontrarse bajo la dependencia de él.

Desde un mes antes de contraer matrimonio. ¿Qué medios hay a favor de los empleadores para verificar cuándo y cómo han contraído matrimonio los empleados?

Pongamos el caso de una de esas faltas de conducta, tan difíciles de probar, que cause el despido del empleado, será a favor de él esta gran indemnización, esta verdadera dote para el matrimonio, constituida por un año de sueldo, si resuelve adelantar el matrimonio o com-

prometerse desde ese momento y realizarlo dentro de los 30 días para estar comprendido en el régimen de la ley.

Es tan imprevisora la sanción —hay aspectos sobre los cuales el señor senador no ha hablado— que ni siquiera fija cuándo debe ser considerado como empleado, como la ley número 11.729. Esta ley, defectuosa y arbitraria, señala el plazo de tres meses a tal fin. Aquí no se preocupa de ese aspecto para nada. Ingresas un empleado; si a los pocos días es despedido y se casa dentro del mes, ya tiene los derechos al beneficio.

La extensión que se otorga por la glosa del miembro informante a las disposiciones que estamos considerando, es sumamente grave, por cuanto se impide la prueba de la necesidad que el empleador tengo por cesación o disminución de negocios a despedir colectivamente un número de empleados. Sabemos muy bien que en la vida mercantil ocurre con frecuencia que una empresa ve disminuir sus entradas y está obligada a reducir sus gastos generales, so pena de ir a la presentación ante el juez. El que quiera evitarlo con la medida prudente de disminuir sus gastos, y, entre ellos, despedir una parte del personal, está sujeto a las prescripciones de esta ley. Aquí debo hacer notar una enorme desigualdad que se establece, aun respecto de los mismos obreros. Supongamos que, por motivo de disminución del trabajo, se despide a 100: 50, de los casados dentro de los 13 meses y, 50, de los casados con anterioridad. Estos últimos solamente podrán pedir como despido medio mes por cada año de servicio, es decir, que si reunieran 10 años de servicio, sólo se les acordará 5 meses de sueldo. Los que estén dentro de los 13 meses, pueden, en cambio, aunque empleados en el mes anterior, exigir los salarios correspondientes a 12 meses. Es que no se puede legislar prescindiendo de las contingencias de la vida, superiores a la voluntad y que se oponen a que se dicten leyes rígidas y que no permitan dilucidar los casos distintos que se produzcan.

Ya se ve cómo las leyes imprevisoras y ligeramente dictadas traen consecuencias injustas, aun con relación a los mismos beneficiarios de ellas.

Me permito también citar, o referirme a las presunciones que establece el Código Civil, ¡cómo no he de conocerlas! Existen otras presunciones, no solamente las *juris tantum*, sino también *juris et de jure*, que no admiten prueba en contrario, pero son, como en los casos que

ha citado el señor senador, por razones de familia, por imposibilidad de producir pruebas sobre determinados hechos que pasan en el secreto de la alcoba, o por hechos ya anteriores, que determinan la existencia de las presunciones, como, por ejemplo, la entrega de la prenda o el documento en el que consta la misma, pero nunca en casos como el presente en que de hecho establecen una verdadera desigualdad entre los litigantes.

Lo grave que tiene esta ley, no es el establecer una simple presunción; es que toda la tramitación de la prueba la deja a las empresas, y la consecuencia práctica será que en todos los despidos de personas comprendidas dentro de los 13 meses, tendrán que declarar que son por causa de matrimonio, agravando así considerablemente la posición de los comerciantes que tengan empleados recién casados en sus establecimientos.

Quiero citar, señor presidente, la opinión de la prensa de la Capital y del interior sobre esta cuestión, que responde a todos los matices de la opinión. Cuando, no hace mucho, citara en forma análoga lo que decían los diarios, algún señor senador dijo con cierto mal humor que su criterio no se dejaba influir en nada por lo que dijeran los diarios. Yo tengo una opinión distinta; creo que con todos sus defectos, los diarios, como toda obra humana, son muchas veces tribuna de doctrina, termómetro que marca el estado de opinión y válvula de escape de ideales, de intereses superiores, que no tienen representante en el Parlamento.

No quiero mencionar los nombres de los diversos diarios que se han ocupado del asunto, con excepción de uno, que es el diario «La Nación». Lo hago por doble motivo: por la posición que ocupa tan merecidamente dentro del periodismo mundial y porque ha sido invocada su opinión como un argumento, tanto por el señor senador Palacios, como por el señor diputado Ruggieri, cuando se ocuparon de la ley que tratamos. Hoy mismo ha vuelto el señor senador a citar un editorial de ese diario.

Dice en su editorial del 21 de agosto, entre otras consideraciones muy plausibles: «Lo que sucedió con la ley general sobre despidos, se ha repetido en este caso, falsando una noble iniciativa y derivando un propósito de justicia hacia la creación de un instrumento que no sólo está destinado a perturbar el trabajo, sino también a fomentar una mentalidad rudamente materialista y una explotación de cuestiones en las cuales nunca debería descenderse de cierto nivel. Ambas leyes, y esta última con

mayor acritud, en lugar de responder a un sano principio de entendimiento entre los diferentes intereses privados, se muestran inspiradas en la base de una profunda desconfianza en las relaciones que existen entre los empleados y sus patrones, colocando a éstos sistemáticamente como tendiendo a burlar sus disposiciones y a perseguir a su personal. El artículo sobre la presunción a que nos hemos referido, junto con la sorprendente aclaración hecha en la Cámara al informarlo, coloca a una de las partes en posición tan absolutamente desigual ante el Estado, que no está muy lejos de lo que sería ponerla al margen de la ley.»

—Ocupa la Presidencia, el señor vicepresidente provisorio del Senado, doctor Alberto F. Figueroa.

Y agrega: «Si el Congreso se hubiese dedicado conscientemente a ofrecer armas para la lucha de clases, no habría dictado la medida en otra forma que la redactada, en que la cuestión del matrimonio viene a quedar reducida a un pretexto ante la enormidad de la indemnización y la facilidad de conseguirla prácticamente siempre, con razón o sin ella, y en que el patrón es considerado un perpetuo infractor y el empleado tiene invariablemente la razón, salvo casos excepcionales y sumamente difíciles de justificar.»

Vuelve a la carga el 28 de este mes, y en un editorial que se titula «Retrocediendo», dice entre otras cosas, esto: «Pues bien; esta labor paciente y fructífera, está amenazada por un cambio en la dirección legislativa. Las leyes que están surgiendo, constituyen un retroceso, volviendo la situación a la época anterior, al crear la desconfianza entre patrones y obreros, como lo ha señalado el Poder Ejecutivo, y al introducir en forma que diríamos orgánica, consagrando con la categoría de un principio jurídico, la regla de que el patrón siempre es un infractor, según sucedió con lo relativo al despido por matrimonio en la parte observada por el gobierno...»

Estas razones, tan claras y tan bien expresadas, me permiten cerrar con broche de oro esta parte de mi exposición.

Pero, terminado el análisis breve y concreto del punto, bajo su faz jurídicoeconómica, quiero agregar algunos conceptos respecto de mi posición ante las leyes de orden social, porque el hecho de figurar como representante de la minoría, solo, en este despacho, me puede hacer

aparecer, ante algunos espíritus, como con criterio estrecho y hasta retrógrado.

Pasando por la violencia de hablar de mí mismo, debo dejar consagrado que he colaborado en primera línea en todas las leyes en favor de la clase laboriosa que se han tratado mientras he sido miembro del Senado; la jornada de ocho horas, el sábado inglés, el descanso hebdomadario de los chóferes, el pago de salarios en moneda nacional, la ley de cooperativas, la fijación del salario mínimo establecido por comisiones paritarias, han tenido en mí un sostenedor entusiasta. Más aún: entiendo que debe insistirse, y ofrezco, desde ya, mi colaboración, a todas las leyes que tiendan a nivelar las clases sociales y a hacer atractiva la vida, aun para las clases más humildes.

Es la política que preconizaba ya el inolvidable León XIII en su encíclica *De Rerum Novarum*, en que insiste el actual papa en *Quadragesimo Anno*, y la que encontró un cuerpo de doctrina en el Código del Trabajo redactado por Joaquín V. González, a que se refería el señor senador, que es el rico venero de que se ha tomado toda la legislación dictada sobre la materia en los últimos 25 años.

Pero si quiero una legislación social que proteja la clase obrera, que aumente su *standard* de vida, quiero, también, que sea con un sentimiento de justicia, y no trayendo una especie de guerra social, cuyas consecuencias serían funestas. No sólo debemos pensar en los obreros, pensemos también en los industriales, que al fin son obreros de la grandeza nacional, puesto que no hemos de permanecer siempre como simples labradores y ganaderos, como en los tiempos de Caín y Abel.

No hace mucho, visitamos, en la honrosa compañía del señor senador Saguier y de algunos diputados, para observar de cerca hechos relacionados con la crisis de la industria textil, algunas fábricas de tejidos, y pudimos ver con dolor, telares paralizados, máquinas detenidas y turnos suprimidos. Todo esto ha recaído no sólo en perjuicio de los empresarios, sino, también, y más pesadamente, sobre los obreros, ya que han debido quedar miles de ellos cesantes, algunos con altas retribuciones.

Es, señor presidente, la consecuencia de la imprevisión de la legislación, que no ha defendido a estas fábricas, a la industria en general. del *dumping* del extranjero, por medio de tarifas apropiadas, y que no la ha defendido, tampoco, del *dumping* interior, sancionando leyes de salarios mínimos y otras análogas, aplicadas con equidad a todos, y no como sucede

ahora, en que hay una cantidad de fábricas pequeñas, de talleres establecidos en los fondos de las casas de familias, que escapan a la inspección del Departamento Nacional del Trabajo, que pagan salarios de hambre, que exigen jornadas enormes, y que ni siquiera están sujetos a las obligaciones de la ley de impuesto a los réditos.

Observamos, también, como un consuelo, que a pesar de la situación adversa, en esas fábricas existen escuelas costeadas por sus propietarios, en las que a los aprendices, antes de ir al trabajo, se les ilumina la inteligencia con la luz de los primeros rudimentos del saber y se les ensancha el corazón haciéndoles conocer y amar a Dios y a la patria.

Soplan en el mundo, señor presidente, vientos ardientes, cargados de tempestad. Ya hemos visto lo que ha sido de España en manos de esa supuesta república, que con los desaciertos cometidos y los crímenes tolerados, se ha echado encima la tragedia que hoy la ensombrece y que, acosada, ha llevado a las altas funciones de gobierno a miembros de la federación anárquica, como si el anarquismo no fuese la negación de todo gobierno y la eliminación de todo orden.

Vemos a Francia, tan prudente en su legislación, introducir la semana de cuarenta horas, y cuando un hombre público como Daladier, lleno de experiencia, aconseja su supresión, porque no es posible soportar la competencia con otros países, porque no es posible fabricar los elementos necesarios para la defensa nacional, se ve a punto de caer porque el frente popular no consiente nunca desprenderse de las ventajas que ha adquirido, ni aunque haya amenaza de conflagración general. ¡Qué les importa, si ellos reemplazan el patriotismo con el vago humanitarismo que han aprendido de los filósofos rusos!

El Senado es muro de contención; representa en nuestra organización política la fuerza conservadora. Se exige, para ser senador, la misma edad que para ser presidente de la República y para ejercer las graves funciones de juez. Se exige una renta determinada o una profesión que dé una entrada equivalente, no con un espíritu plutocrático, sino con un sentido de responsabilidad y arraigo. Somos, repito, las fuerzas conservadoras, no de prejuicios, ni de abusos ni de privilegios, pero sí de la tradición institucional, del espíritu nacional, de las ideas democráticas de nuestros antepasados, tan distantes de la demagogia como del despotismo.

Aquí se sientan los hombres de más largos servicios, como coronamiento de su vida política. Eso nos impone deberes que no debemos eludir. Seremos los responsables si permitimos que se infiltre en la legislación de nuestro país una corriente tendenciosa y malsana, de la cual saldrán en el futuro desacuerdos, si no una verdadera guerra social, cuyas consecuencias lejanas nadie es capaz de prever.

Sé muy bien que este asunto lo que votamos es un incidente, y si doy tanta importancia al voto del Senado, es porque a la vez, es un síntoma de un estado grave que debemos combatir y desarraigar con toda la energía de que seamos capaces.

He terminado. (*¡Muy bien!, en las bancas.*)

Sr. Palacios. — Pido la palabra.

Muy brevemente voy a ocupar la atención del Honorable Senado, porque hay otro asunto que considerar.

No oculto mi sorpresa frente a las derivaciones insospechadas del discurso del señor senador por Salta, con motivo del veto a la parte final del segundo artículo de una ley sancionada por unanimidad en el Congreso argentino.

Sin duda, la exposición del señor senador relativa a España, a la anarquía y al comunismo, nada tienen que hacer en este asunto. Me sería grato sostener un debate a este respecto con el señor senador en cualquier otra oportunidad, pero me parece imprudente en este instante traer a colación la guerra civil de España, cuyos valores del carácter y del espíritu nunca ascendieron tan alto.

No es posible admitir las manifestaciones del señor senador; no las admito, las rechazo en absoluto y declaro frente a su actitud que estoy con la España republicana; estoy con los que luchan por la libertad. Estoy con el pueblo español que levanta la antorcha del idealismo sostenida con mano vigorosa; con los que desde el solar hispánico nutren con sangre de sacrificio y heroicidad las raíces milenarias de la raza y han jurado ser libres o morir. Y basta. Este asunto ha venido con gran prestigio de la Cámara de Diputados, donde fué votado por unanimidad. Y hago notar que la primitiva sanción del Senado fué modificada por los diputados del partido a que pertenece el señor senador por Salta. Por eso hablar de anarquía, de demagogia, de desorden, resulta una ligereza.

Cuando llegó este proyecto al Senado, me apersoné a mis distinguidos colegas, los doctores Landaburu y Serrey, para explicarles

cuáles eran las modificaciones introducidas y pedirles que se citara a la comisión si lo creían conveniente. Le leí al señor presidente de la comisión, señor senador Serrey, las modificaciones introducidas por sus correligionarios. Los autores de las modificaciones eran los diputados Fassi y Aguiar, este último ex decano de la Facultad de Derecho de Córdoba. El señor presidente de la Comisión de Legislación, señor senador Serrey, aceptó las modificaciones, lo mismo que el señor senador Landaburu.

Entré al recinto y hablé en nombre de la comisión. Dije exactamente cuáles eran las modificaciones, en presencia del senador Serrey y sobre cada una de ellas recayó una votación unánime de la Cámara, y el señor senador por Salta, doctor Serrey, votó favorablemente todas las modificaciones. ¿Cómo es posible entonces, señor presidente, admitir la exposición del señor senador Serrey, cuando él es uno de los causantes de que la ley haya sido votada en la forma que ahora rebate?

Yo sé que el señor senador por Salta, es un jurista; un hombre que se ha preocupado con cariño de la legislación social y que ha contribuido, eficazmente, a que se sancionen algunas leyes del trabajo, lo que expreso con satisfacción, porque, no solamente siento por él una gran estima intelectual, sino que me siento, además, vinculado al señor senador, por un vivo afecto.

Pero, señor presidente, no es posible de ninguna manera admitir, por eso mismo, el discurso pronunciado por el señor senador, que habla de ligerezas, que de existir, en primer término, serían de él, pues yo personalmente he informado el asunto con el beneplácito del señor senador, como miembro de la comisión y él, por su parte, ha votado todas las modificaciones con que ha venido de la Cámara de Diputados.

Y ahora contestaré sólo dos observaciones del señor senador, porque las otras, a pesar de su afirmación categórica, han sido ampliamente refutadas en mi larga exposición.

El señor senador ha hablado de una situación angustiosa para la industria. Olvida el señor senador, que he citado una nota del señor Luis Colombo, dirigida al señor presidente de la República, en la que le manifestaba, como representante de la Unión Industrial Argentina, que no era una modalidad de los industriales la de exonerar a las empleadas por motivos de matrimonio; de manera que, entonces, con ellos

no habrá conflicto y resulta por eso inexplicable su oposición a la ley.

Se trata, especialmente, como sabe el señor senador, de las grandes empresas concesionarias de servicios públicos. Es claro que si algún industrial violara la ley, sería castigado con el mismo rigor que las empresas extranjeras.

Además, el señor senador ha manifestado que no se puede admitir esta presunción porque rompe la igualdad entre las partes —y eso no sería nada, porque ya está refutado—, sino porque hace imposible la prueba del patrón, que para el obrero es fácil: es exactamente todo lo contrario. En este caso, señores senadores, se justifica más que en ninguna otra ley la presunción objetada, porque se dispone que la prueba relativa a la causa del despido, estará a cargo de la parte que verosíblemente está en condiciones de probarla. El empleado cesante sólo puede demostrar estos dos hechos, de cuya prueba no le exime la ley: el matrimonio o el despido. El patrón que despide, puede probar que la causa de la cesantía no es el matrimonio. En cuanto a que el matrimonio es la causa determinante del despido, el cesante no puede probarlo nunca, a no ser que exista la confesión expresa del patrón.

El patrón que despide, si invoca una causa legítima, es regla universal que debe probarla; y esto es lo único que dice la ley.

No es exacto, pues, lo que afirma el señor senador, cuando dice que el obrero puede probar con toda facilidad lo que no puede probar el patrón. Es exactamente todo lo contrario.

Yo no quiero abusar de la atención de los señores senadores, porque tenemos que tratar otro asunto; de manera que dejo a este proyecto que corra la suerte que le corresponda.

Nada más.

Sr. Serrey. — Pido la palabra, para decir muy pocas.

Cuando vino al Senado este proyecto con la sanción dada por la Cámara de Diputados, antes de ser sometidas sus modificaciones al orden del día, el señor senador por la Capital propuso a los miembros de la comisión que se consideraran ese día, diciendo que se trataba de modificaciones de detalle, que tendían a perfeccionar la ley. Hemos cometido el pecado de ligereza el señor senador Landaburu y el que habla, así como todos los señores senadores, pero para mí esto será una lección y en adelante no voy a aceptar jamás que se traten sobre tablas, sin que hayan sido sometidas previa-

mente al crisol de la reflexión, leyes de esta naturaleza.

Pero si hemos procedido en forma equivocada, nuestra obligación moral es volver sobre nuestros pasos, y aceptar este veto que, como digo, está fundado en muy poderosas razones.

Ahora, en cuanto al origen de la modificación introducida por la Cámara de Diputados, no me afecta el hecho de que hayan sido correligionarios míos los que la hayan propuesto; en este caso el pabellón no cubre la mercancía; si la ley es mala es lo mismo que haya sido propuesta por un demócrata nacional que por un socialista; aquí nosotros tenemos que juzgar con nuestro criterio propio.

Yo no me he inspirado en las fuentes del derecho civil; he ido a esas prolongaciones a que se refiere el señor senador, porque nosotros en estos asuntos debemos obrar como legisladores, es decir, ir a las fuentes mismas de la realidad.

Sr. Palacios. — Pido la palabra, para decir dos y dar por terminado este asunto.

Quiero dejar constancia de que el señor senador ha escuchado dos veces las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados: primero, en antesalas, y luego, en el recinto. Y que después las ha votado favorablemente.

Para contestar las últimas palabras del señor senador, me permito recordar que en el orden del día número 21 aparece el despacho de la Comisión de Legislación, que preside el señor senador Serrey, sobre el proyecto del señor senador Landaburu, referente a enriquecimiento ilegítimo de funcionarios públicos. El despacho está firmado, naturalmente, por el señor senador Serrey, y el artículo 3º dice textualmente lo siguiente: «La prueba de que el enriquecimiento proviene de las causas mencionadas, incumbe siempre al funcionario o empleado». A mí me parece esto definitivo, porque admitir para el presidente de la República, para los ministros, para los senadores, para los diputados, la inversión de la prueba y no admitirla cuando se refiere a empleados y empleadores, no tendría explicación, máxime cuando el señor senador Landaburu ha dicho en los fundamentos de la ley, que están agregados al despacho, lo siguiente: «El enriquecimiento ilegítimo usa muchos medios sutiles y asume mil formas y figuras distintas que escapan a toda previsión legislativa, sin dejar de constituir por ello una amenaza para el orden, la igualdad y la moralidad de la función pública. Por ello, es necesario erigirlo en un delito formal

y admitir la inversión de la prueba; es la única manera de hacer eficiente las responsabilidades penales.»

Esto es, señor presidente, —y lo aprueba el señor senador Serrey— un delito de sospecha. Bastaría que el presidente de la República, en su balance, tuviera bienes que no pueda probar de dónde los ha adquirido, para que se constituyera en delincuente. ¿Dónde están los principios de derecho antes invocados? El señor senador Serrey sostiene la buena causa al poner su firma en el despacho del proyecto Landaburu.

Sr. Serrey. — Es un caso absolutamente distinto el del enriquecimiento de funcionarios públicos. Al funcionario público que hace su balance y que, después, por causas legítimas obtiene un acrecentamiento de sus bienes, cono-

ciendo esta disposición de la ley, le será fácil conservar en su poder la documentación...

Sr. Palacios. — Exactamente como el industrial, que sabiendo que existe la ley, guardará las pruebas indispensables.


Sr. Serrey. — Es una disposición *adversus omnes*, que se aplica en general y no en una discusión en particular.

Sr. Palacios. — Es mucho más grave.

Sr. Presidente (Figueroa). — La Secretaría informa que no hay número en la casa, y de acuerdo con el artículo 61 del reglamento, declaro suspendida la sesión.

—Era la hora 18 y 15.

JUAN F. TORRADO.
Subdirector de Taquígrafos.


H. Cámara de Diputados de la Nación
Secretaría Parlamentaria
Dirección de Información Parlamentaria